



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME JUSTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO 5/2024 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, HOSPITAL CANTOBLANCO, HOSPITAL CARLOS III, HOSPITAL EMERGENCIAS ENFERMERA ISABEL ZENDAL, CENTROS DE ESPECIALIDADES Y CENTROS DE SALUD MENTAL ADSCRITOS AL HOSPITAL.

En base al informe emitido por la Letrada Jefe Adjunta del Servicio Jurídico en la Consejería de Sanidad con el número S.J.C.S. 107/2024, donde se informa favorablemente los pliegos emitidos con las consideraciones a las que el presente escrito es el hilo conductor de las mismas, configurando fielmente su contenido y a la solicitud emitida por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento donde constata la necesidad e idoneidad en atención al objeto que se pretende contratar, así como en relación a las funciones que este hospital tiene asignadas, subrayando el hecho que el procedimiento abierto vigente con idéntico objeto, P.A. 1/2018 se encuentra en continuidad, se emite el siguiente informe:

1.- Justificación de necesidad e insuficiencia de medios.

Es de crucial necesidad que los residuos generados por el Hospital Universitario La Paz y centros adscritos sean recogidos y tratados en óptimas condiciones para que el Hospital pueda seguir desarrollando su actividad asistencial con total seguridad para los pacientes y para los trabajadores de los centros

El Hospital Universitario La Paz no dispone de medios necesarios para la ejecución del presente servicio, toda vez que no existe dotación de plantilla orgánica de personal cualificado para la realización de dicho servicio, ni de medios materiales, por lo que es necesario la externalización del mismo para conseguir una actividad asistencial de calidad, propia de una Institución Sanitaria pública y acorde con los principios de calidad y compromiso con los usuarios demandantes de la misma.

Asimismo, con la externalización del presente servicio se intenta conseguir la reducción de costes de todo orden: selección y formación, suplencias, seguros sociales, etc., con la mayor calidad posible ofertada por las empresas especializadas del sector.

2.- Justificación de solvencia y justificación de adscripción de medios.

Según lo establecido en el articulado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es necesario establecer unos criterios exigibles de solvencia económica y financiera y técnica; y adscripción a la ejecución del contrato

de medios, siendo estos proporcionales al objeto del contrato, permitiendo la libre concurrencia en el procedimiento de contratación y fomentando la participación en el mismo.

En cuanto a los criterios de solvencia económica y financiera la LCSP en su artículo 87 establece que ésta deberá acreditarse por uno o varios de los medios que se relacionan en dicho artículo, a elección por el órgano de contratación. De los diferentes criterios para acreditar la solvencia económica y financiera se ha elegido la acreditación mediante el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, puesto que se considera el más adecuado para asegurar la fiabilidad económica de los empresarios que licitan, en función de lo dispuesto en el artículo 87, punto 1, apartado a).

Asimismo, al tratarse de un contrato de un servicio, como criterio de selección se exige la acreditación de un volumen una vez y media el valor anual medio del contrato.

En cuanto a los criterios de solvencia técnica, la LCSP en su artículo 90 establece que, en los contratos de servicios, deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se deberá acreditar según lo establecido en el punto 1. Apartado a) del precitado artículo, dado que se considera lo más adecuado para el servicio que nos ocupa, aportando cada uno de los licitadores relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, indicando su importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos, puesto que permitirá estimar la conveniencia y capacidad técnica de los licitadores que se presenten para poder afrontar el objeto del contrato que se solicita.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante la presentación de al menos tres certificados dentro de los últimos tres años indicando importes, expedidos o visados por el órgano competente.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

En relación a la adscripción de medios para el presente contrato, con carácter obligatorio, se solicita un compromiso del licitador de adscripción de los medios humanos y materiales suficientes para la ejecución del contrato, concretando los mínimos, conforme a lo establecido en el art. 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y particularmente los establecidos en los apartados 5.2.1 C y 6.2 del PPT,

puesto que se trata de unos medios idóneos para asignar con una calidad mínima al procedimiento.

3.- Condiciones especiales de ejecución y penalidades

La especial incidencia que el objeto del presente procedimiento tiene en las actividades sanitaria-asistencial del Hospital Universitario La Paz y centros adscritos, hace necesario establecer un régimen especial de penalizaciones y sanciones, que se detallan y explicitan en la Cláusula 1, Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para su aplicación en aquellos supuestos en que las prestaciones exigidas sean ejecutadas defectuosamente.

Las condiciones especiales de ejecución que se solicitan, están vinculadas al objeto del contrato, no son discriminatorias y son compatibles con el derecho comunitario, asimismo, dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 202.1 de la LCSP y en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como, al apartado séptimo 3.a) del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para la mejora de los valores medioambientales y una gestión racional de los recursos naturales con la finalidad última de tomar en consideración las condiciones medioambientales que se empleen en la realización del servicio adjudicado.

En cuanto a la imposición de penalidades por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello, destacar que el contrato que nos ocupa, trata de un conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de los desechos, desde su generación, hasta su eliminación o reaprovechamiento, incluyendo la recogida de los residuos, su transporte, la gestión de los que son especialmente peligrosos y el reciclaje de los materiales aprovechables, para ello es indispensable contar con los medios personales y materiales adecuados que, como mínimos solicitan los pliegos.

En relación a las penalidades por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores el artículo 217 de la LCSP, prevé que el órgano de contratación pueda comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal ha de hacer a los subcontratistas o suministradores en los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. Así, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la

prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, por ende, cuando esto sea incumplido, es necesario determinar los mecanismos posibles para que pueda ser subsanado.

4.- Elección del procedimiento de licitación.

Al objeto de promover la libre concurrencia y publicidad en el ámbito de la contratación pública, así como el valor estimado del mismo, se considera adecuado elegir el Procedimiento Abierto, en base al artículo 156 de la LCSP, por lo tanto, cualquier interesado podrá presentar una oferta, quedando excluida toda negociación con los licitadores de los términos del contrato.

La contratación que se propone, en razón de su objeto y valor estimado, queda sujeta en todos sus efectos a las normas de Regulación Armonizada Comunitaria, artículo 21 de la LCSP.

5.- Criterios de adjudicación

Los criterios de adjudicación elegidos se consideran adecuados y convenientes para el objeto del contrato conforme a lo establecido en el artículo 145 en su apartado I de la Ley 9/2017 al establecer que *“la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”*

A este respecto, en el pliego de prescripciones técnicas se han recogido las exigencias mínimas que debe cumplir la prestación, dejando a valoración aquellas cualidades complementarias que pueda ofertar el licitador.

En este sentido, los criterios elegidos, así como la ponderación aplicada, se consideran que son adecuados para obtener la mayor calidad al mejor precio. Para ello, se ha elegido el cálculo de la puntuación de la oferta económica una fórmula proporcional ya que atribuye la mayor puntuación a la oferta más baja y no discriminatoria al no atribuir márgenes desproporcionados en la puntuación entre las ofertas.

La ponderación asignada a la valoración de la oferta económica, 60 puntos, es la más adecuada en relación al resto de los criterios que valoran los aspectos cualitativos.

Respecto a los criterios de adjudicación de valoración automática, 20 puntos, repartidos entre 10 ítems que, tienen que ver con el objeto del contrato, se trata de criterios que permiten lograr una mejor prestación, concediendo en general el aumento en la calidad del servicio.

En relación a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, ponderados con 20 puntos, divididos entre 4 ítems que, están relacionados con el objeto del contrato, donde se evalúan aspectos que se consideran relevantes para las prestaciones a realizar. La valoración de estos criterios cualitativos por juicio de valor supondrá cuantificar cuestiones que consideramos fundamentales y que deben ser analizadas por personal técnicamente cualificado, especialista en la materia, valorando aspectos cualitativos que están por encima de los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas correspondiente, en consonancia con los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad a los que hace referencia el artículo 145.5 de la LCSP.

Al respecto y al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público vigente, uno de los objetivos que inspiran la misma es el de conseguir una mejor relación calidad-precio y para lograrlo se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener suministros, obras y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores que estén vinculados al objeto del contrato. Así teniendo en cuenta lo expuesto y el espíritu de la Ley “promover el principio de mejor postor frente al principio de postor más barato”, se emite el presente informe estimando como no deseable continuar estableciendo como criterio casi exclusivo, la baja económica, a más abundamiento, traer a colación el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Las amenazas y obstáculos al Mercado Único”, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 21 de abril de 2017, según el cual, en la contratación pública, “el objetivo debe ser promover el principio de mejor postor frente al principio de postor más barato”. (punto 1.14)

6.- Justificación de la exigencia de seguro.

La prestación objeto del contrato y las consecuencias económicas que pueden derivar de las mismas, pueden tener una dimensión económica que justifica la exigencia de un seguro de responsabilidad civil que permita garantizar los riesgos que dichas actividades entrañan. En virtud de lo anterior y tomando en consideración la complejidad técnica de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, se estima proporcionada.

En este caso se trata de un contrato de servicios que tiene por objeto la gestión integral de los residuos generados en el Hospital y Centros adscritos, desprendiéndose de ello que las actividades a desarrollar para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato son actividades profesionales y, por tanto, pueden generar riesgos causantes de responsabilidades profesionales, así como que los riesgos cubiertos por la póliza de seguro exigida están vinculados con el objeto del contrato al alcanzar riesgos por la ejecución del servicio.

Como apunta el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 853/2019, de 18 de julio, que para la determinación del importe de responsabilidad civil que debe cubrir el seguro de riesgos profesionales, ha de reconocérsele al órgano de contratación un ámbito de discrecionalidad, puesto que es dicho órgano el que está mejor facultado para valorar los riesgos inherentes a la prestación del servicio. Asimismo, la Directiva 2014/24/UE en su artículo 58.3 al regular los criterios de selección, habilita a los poderes adjudicadores a exigir a tal fin “un nivel adecuado” de seguro de indemnización por riesgos profesionales; esto es, un nivel proporcionado o adecuado por referencia a la dimensión económica del contrato. Al respecto, exponer que el valor estimado del contrato es de 12.642.694,81 € mientras que el importe exigido para el Seguro de Responsabilidad Civil en el apartado 16 de la Cláusula 1, del Capítulo I del PCAP es 1.000.000 €, por lo que se especifica plenamente adecuado y acorde con el objeto del contrato el importe exigido en la póliza de seguros.

7.- Justificación del carácter plurianual del contrato.

Que el contrato que nos ocupa tiene como objeto la gestión integral de residuos, en el que, para la elaboración de los pliegos y resto de documentos incluidos en el expediente, necesita un trabajo multidisciplinar intenso donde hay que tener en cuenta múltiples elementos intrínsecos al mismo, por lo que hasta el fin de su proceso se han utilizado horas y horas de trabajo entre los varios grupos que confeccionan el mismo. Por lo anteriormente expuesto, es necesario amortizar este trabajo de forma que se pueda emplear en varias anualidades a futuro y es por lo que el plazo de ejecución que se solicita en el apartado 18 de la Cláusula 1 del Capítulo I del PCAP es de 12 meses, con una posible prórroga adicional de 48 meses, en base al literal del artículo 29 de la LCSP y destacando que, cada una de ellas no podrá superar un período adicional de 12 meses.

Al respecto, se realiza, un compromiso de gastos plurianuales en base a lo establecido en el artículo 41 del RDL 36/2020: se podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los siguientes límites y anualidades:

El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos no será superior a cinco. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito presupuestario a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente y en el segundo, el 100 por ciento, en el tercer ejercicio, el 70 por ciento y en los ejercicios cuarto y quinto, el 60 por ciento y 50 por ciento.

8.- Justificación criterios de presunción de anormalidad

En base al artículo 149 de la Ley 9/2017, se expone en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, para determinar la oferta incurso en presunción de anormalidad en el contrato que nos ocupa, se tendrá en cuenta de los criterios objetivos establecidos los relacionados con el coste, siendo los límites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- Si se presentase un único licitador se considerará que incurre en presunción de temeridad si su oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 Uds. porcentuales.
- En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como desproporcionada o temeraria la baja de toda proposición económica cuyo porcentaje exceda de 20 unidades por lo menos a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

Al tratarse de un criterio objetivo meramente computable por medio de una fórmula, el mismo es plenamente objetivo sin posibilidad de aplicar apreciaciones subjetivas al respecto, resultando una presunción de anormalidad acorde con el principio de igualdad aplicada de forma paritaria entre todos los licitadores.

Firmado digitalmente por: SANCHEZ LOPEZ LUCIA
Fecha: 2025.03.20 14:43

JEFA DE SERVICIO E.F.
Fdo. Lucía Sánchez López